

El ajuste en Ciencia y Tecnología fue noticia en los medios de comunicación masiva cuando una investigadora del CONICET se presentó a participar en un renombrado concurso de preguntas y respuestas con el propósito de conseguir dinero para continuar con el trabajo que su equipo estaba llevando a cabo. La misma investigadora planteó luego los puntos que reclama la comunidad científica –de la que participan las Universidades Nacionales- y que movilizan sus luchas actuales. El OPPPED publica a continuación dos artículos referidos a esta problemática, uno de la Dra. Esther Levy y otro del Grupo de discriminadxs por edad en la CODEC (Comisión Contra la Discriminación Etaria en Ciencia) enviado por la Dra. Marcela Kurlat, que analizan esta política de ajuste y desfinanciamiento en el marco del proyecto político-económico del macrismo. Esta publicación coincide con la semana en que tendrá lugar la Marcha de Antorchas del jueves 16 de mayo, en defensa de la Universidad, la Ciencia, la Tecnología y el Salario.

EL SENTIDO POLÍTICO DE FORMAR CIENTÍFICOS DESDE EL ESTADO. IDEAS PARA EL DEBATE.

Esther Levy

Doctora en Educación, Magíster en Políticas Sociales y Licenciada en Ciencias de La Educación (UBA). Docente, investigadora y extensionista de la FFyL/UBA. Secretaria de Recreación y Cultura de FEDUBA (CONADU/CTA).



El problema del ajuste en Ciencia y Tecnología tiene su pico de exposición mediática cada año cuando se publican los listados de investigadores que quedan excluidos de la carrera de investigador científico en CONICET. En 2019 el número de ingresos fue el más bajo de la última década: solo 450 doctores y posdoctores (el 17 % de los postulantes), quedando 2.145 excluidos. A partir de este episodio, en los primeros días de abril se realizó una jornada de lucha y movilización en defensa de la ciencia y la tecnología que incluyó asambleas y cortes de calles para visibilizar el conflicto y mostrar que no se trata de un hecho nuevo ni aislado, sino que es parte de la lógica recurrente del gobierno nacional que incumple con la obligación de financiar las políticas científicas (Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). En esa protesta no sólo participaron científicos del CONICET, aunque la mayoría eran becarios e investigadores de carrera, sino también docentes-investigadores universitarios representados por sus sindicatos de base cuyos afiliados son docentes y a la vez investigadores y extensionistas.

El conflicto de CONICET pone sobre la mesa de discusión la falta de proyecto político de desarrollo científico y tecnológico, la inconciencia de formar doctores en diversas disciplinas para luego no ofrecerles propuestas en el país e invitarlos, en el mejor de los casos, a emigrar¹. Por supuesto, también aumenta el número de desocupados porque estos investigadores, cuya sede de trabajo no siempre es un instituto dependiente de CONICET sino también de universidades nacionales, se quedan sin posibilidad material de continuar sus proyectos y esto, a su vez, complica el funcionamiento de dichos institutos. El desempleo en este caso tiene una doble connotación: falta de ingresos y paralización de líneas de investigación que deberían producir avances con impacto social. Recordemos que en las universidades nacionales además de existir institutos de investigación dependientes del CONICET, también funcionan los institutos de investigación propios, financiados por las universidades o las mismas facultades y que, de la misma manera que otros centros de desarrollo científico como el INTA por ejemplo, sufren las medidas de ajuste presupuestario que impactan en su funcionamiento cotidiano y que ponen en peligro la continuidad de proyectos de corto, mediano y largo plazo. No estamos hablando sólo de insumos de laboratorio cuyos costos son elevados, sino también de bibliografía, presupuesto para asistir y organizar eventos científicos (congresos, jornadas), fotocopias, etc. Esto sin mencionar la degradación de los salarios y becas al ritmo de la inflación, o el peligro de cierre de institutos de investigación de alta complejidad por falta de recursos para mantenimiento (luz, agua, gas, limpieza, seguridad).

El conflicto del CONICET se ha transformado en un faro que llama la atención internacionalmente, que indigna por la indiferencia gubernamental y que visibiliza una crisis muy profunda que la comunidad científica universitaria y no universitaria padece desde que el gobierno nacional decidió desfinanciar el desarrollo científico y tecnológico, recortar el presupuesto para las universidades nacionales (sin contar la cuestión salarial), reducir las becas para los estudiantes de grado y posgrado y aplicar fuertes restricciones a los ingresos a la carrera de investigador, entre otras cuestiones que afectan al sector.

¹ El número de científicos que decidieron regresar al país en el marco del programa Raíces es un indicador que viene en retroceso. En 2010 se registró el pico de regresos con 153 investigadores que regresaron. En 2016, este número cayó a 81, para desmoronarse del todo en 2017 con 17 y 32 en 2018.

Hubo una vez un país que tuvo un Ministerio preocupado por la investigación científica

Sería injusto decir que el actual gobierno es tan creativo como para generar estas políticas de ajuste y desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología. No son gente con ideas, solo imitan y profundizan problemas que inició la dictadura y continuó el menemismo. La idea es la misma y el origen también: culpar al Estado de todos los males y abrirle caminos al mercado, optimizando las ganancias de unos pocos en detrimento del bienestar general. Lo que sí es innovador es cuál es el perfil del soldado elegido para ejecutar el desmantelamiento furioso y rapaz de las políticas científicas. Me refiero al ex Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) que, no sólo desmanteló lo que él mismo ayudó a construir, sino que aplaudió su destitución a secretario. No es de relevancia su historia, pero dice mucho sobre el desinterés y la falta de compromiso con la que encara su tarea.

En diciembre de 2007, a comienzos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se creó el MINCyT, dándole a este sector un lugar preponderante y de jerarquía, impensado una década atrás cuando un ex ministro de economía recomendó a los científicos que fueran a lavar los platos a raíz de un reclamo similar al actual. Desde el espacio físico, hasta las políticas de desarrollo científico y la erogación presupuestaria, todo indicaba que la Argentina ya no volvería al pasado. La proyección y el impulso político que tenía este Ministerio fue recomponiendo hasta poner de pie el avance científico nacional. Sin embargo, este sendero optimista iba a ser interrumpido por la llegada de la alianza Cambiemos al gobierno, mostrando desde el principio un absurdo desprecio por la educación, la cultura, y por supuesto la ciencia y la tecnología.

La continuidad del ex ministro, hoy secretario, desconcertó a propios y ajenos y puso un signo de interrogación sobre la continuidad de las políticas que muy pronto se disipó: se

avicinaba un cambio de rumbo que se sintetiza en la decisión es destruir el sistema científico nacional porque no es importante para el proyecto político del gobierno.

Pronto, aquel ministro estrella dejó de brillar y se ocupó de dismantelar el sistema, contemplar sin reacción los recortes presupuestarios, y lo que es peor aún, acompañó con su propio discurso las medidas que sus nuevos jefes políticos le dictaban. Para octubre de 2018, tras participar en el coloquio de IDEA, el secretario aseguró con entusiasmo que espera quedarse en su cargo hasta fin del mandato presidencial, y seguramente así será.

Es mucho más que una lucha sectorial

El discurso de insertarse en el mundo está atravesado por mostrar que “podemos juntos” porque estamos “cambiando”. No estoy segura de la primera idea, pero sí de la segunda.

La promesa electoral de cambio se cumplió, las políticas de restitución y profundización de derechos sociales están en retroceso y el discurso sobre los Derechos Humanos está estigmatizado por “tener contenido político”, como si fuera dissociable (si es un derecho no es una mercancía que distribuye el mercado y entonces es el Estado el que tiene el rol indelegable de garantizar las condiciones para ejercerlo, y eso es imposible de despolitizar). Otros logros del cambio son: las escuelas y jardines sin construir y la falta de mantenimiento edilicio como el caso de la escuela 49 de Moreno, donde el abandono terminó en la muerte de una maestra y un auxiliar en agosto de 2018, las paritarias universitarias desactualizadas por la inflación y un compromiso de actualización que lleva meses de negociación y se da a cuenta gotas². También la privatización del 51% de Arsat (entregada a EEUU) y el impacto negativo en materia de desarrollo de la industria satelital y de retroceso en la soberanía comunicacional³. ¡Claro que cambiaron las cosas! Sólo que

2 En abril de 2019 se logró cerrar el acuerdo paritario de 2018. En porcentajes generales el cierre fue en 44% (compuesto por el 25% de octubre de 2018, 5% enero 2019, 4% febrero 2019, 5% marzo 2019 sumado a la jerarquización contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo del 2% en marzo 2019 y un 3% en abril 2019) frente a una inflación interanual de 51,3% (según datos oficiales).

el cambio no favoreció a las mayorías, al pueblo, pero es coherente con la visión liberal de un Estado que no se involucra en lo social y le deja al mercado la regulación de la vida.

Pero, también tenemos la posibilidad de volver a pensar en un país más justo y para todos y todas, donde investigar no sea un privilegio sino un trabajo al servicio del bienestar y el desarrollo nacional. Defender la continuidad de las actividades de los científicos del CONICET, de los institutos de investigación dependientes de las Universidades Nacionales, de las instituciones públicas de desarrollo científico, es también defender un modelo de soberanía y desarrollo económico nacional.

Sin embargo, para avanzar en dirección a lograrlo hay que entender que este ataque no se limita al ámbito sectorial, en tanto afecta a otros sectores como el de la producción, el trabajo y la política social (salud, vivienda, sistema provisional, etc.). Leer aisladamente lo que sucede en la educación, la ciencia y la tecnología es un error que nos hace perder de vista el contexto general atravesado por la crisis económica, el mega endeudamiento, la fuga de capitales y la indiferencia de la conducción política. Las políticas científicas necesariamente tienen que pensarse estratégicamente en concordancia con lo que pasa en todos los ámbitos, y la solución no es sectorial. La lucha es en unidad con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que tenga sentido. De lo contrario, las fuerzas se debilitan y los reclamos se diluyen con respuestas puntuales que actúan como parches a la coyuntura. El futuro llegó hace rato y el reclamo es siempre a través de la política, organizado y en unidad.

3 La privatización de Arsat viola la Ley de soberanía satelital 27.078 que prohíbe la privatización de cualquier posición satelital. Para modificar esta ley es necesario contar con el apoyo de dos tercios del Congreso. De lo contrario se estaría incurriendo en un delito.